

## MÉXICO 1995: ENTRE LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS Y LA CRISIS POLÍTICA

ALEJANDRO ÁLVAREZ BÉJAR \*

### INTRODUCCIÓN

La devaluación del peso mexicano frente al dólar, con su secuela de caos cambiario y crisis financiera, además de simbolizar ante la opinión pública nacional e internacional el hundimiento del modelo neoliberal en México, por un lado, sincronizó la crisis económica con una delicada crisis política de credibilidad externa e interna, mientras que por el otro, nos puso otra vez bajo las pinzas destructivas del enésimo programa “ortodoxo” de estabilización, que intenta recomponer los desequilibrios macroeconómicos que han tambaleado al neoliberalismo en México.

Con ese programa de emergencia, se trata, sobre todo, de mantenerlo a flote para seguirlo reivindicando como modelo ante los países del Tercer Mundo, aunque también, para continuar por muchos años más la depredación de la población trabajadora urbana y rural de México que le significa al gran capital nacional e internacional, altas ganancias. También se trata de evitar que el fracaso del modelo se asocie con las operacionalidad práctica de las profundas asimetrías del proceso de integración económica que, justo en 1994, puso en vigor el Área de Libre Comercio de América del Norte.

Es muy importante introducir este texto recordando que desde me-

\* Profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio, financiado por la DGAPA-UNAM/IN 302594.

diados de los setenta hasta la fecha, los programas de estabilización recomendados a México por el Banco Mundial y puntualmente supervisados por el Fondo Monetario Internacional han buscado, un aumento de las ataduras del país a través del endeudamiento externo, mediante la multiplicación de las quiebras productivas, comerciales y ahora eventualmente hasta las quiebras bancarias, además de provocar un gravísimo deterioro salarial y el aumento tan dramático como políticamente peligroso del desempleo.

Se ha comprobado y se sigue evidenciando que esos programas de “estabilización” promovidos en México por los organismos supranacionales, han buscado tres objetivos estratégicos: uno, barrer con los capitales nacionales para que el capital transnacional especialmente norteamericano atrape nuevos espacios de nuestro mercado interno; dos, avanzar en el control de los recursos naturales (energéticos especialmente el petróleo, pero también minerales y recursos forestales); y tres, sobre todo, han buscado profundizar la desregulación del mercado laboral mexicano con un doble propósito: vaciar el fondo de consumo de los trabajadores para recomponer los márgenes de ganancia deteriorados por el parasitismo financiero y, además, con la disminución de los salarios mexicanos, buscan presionar a la caída de los salarios reales de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá.

De cara a esta última crisis financiera, el gobierno de Ernesto Zedillo ha aceptado repetir como política económica el mismo esquema neoliberal macroeconómico que nos condujo primero a la firma y luego a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que en México ya mostró sus límites económicos, políticos y sociales: más austeridad en el gasto gubernamental, más apertura comercial, más desregulación a costa de la intervención estatal y más privatizaciones, esquema que acaba en otra severa crisis financiera.

Espectacular resumidero de los grandes defectos nacionales del decadente régimen priista, el estado de Chiapas, en dolorosa representación de lo que padecemos en todo México, hoy muestra al mundo en forma descarnada ni más ni menos que nuestras peores carencias económicas, nuestras intolerancias étnicas, políticas y sociales, nuestras contradicciones militares y religiosas, nuestra ambivalencia cultural.

Como quien dice, Chiapas demuestra con creces la continuidad neoliberal en su más racista expresión ininterrumpida desde el siglo **xvi** hasta el **xx**: la sistemática exclusión de la población indígena, apuntalada primero con la dominación colonial impuesta por España, pa-

sando por el predominio regional “modernizador” del capital alemán hasta llegar a la era “luminosa” de la integración económica con el mercado de Estados Unidos.

Pero Chiapas, afortunadamente no es sólo eso: también es una poderosa reserva social del México del siglo XXI. Es un simbólico reducto de las raíces del México profundo como identidad actual y un digno factor de defensa de la soberanía nacional y de impulso a la revolución democrática que reclama el país.

Si pensamos en lo que está detrás del levantamiento armado de enero de 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), o si pensamos en lo que está detrás de las tomas de tierras promovidas por las organizaciones campesinas agrupadas en el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) como resistencia civil contra el fraude electoral, es evidente que en Chiapas hoy se vive en primer término, una nueva etapa histórica en las periódicas y recurrentes crisis de autoridad estatal y local.

En respuesta a esa crisis de autoridad, el gobierno federal ha ido acumulando efectivos militares en Chiapas, hasta llegar formalmente a 30 mil hombres; aunque parece haber dado un salto cuantitativo de importancia al concentrar recientemente, según denunció el EZLN, a cerca de 50 mil hombres.

Formalmente y desde un punto de vista estrictamente militar, se trata de un clásico cerco “sanitario” sobre una parte de los territorios de los Altos de Chiapas y la parte alta de la Selva Lacandona, en preparación de una campaña de aniquilamiento sobre el EZLN.

Realmente y desde un punto de vista político-social, el Ejército Federal significa un formidable refuerzo físico a la debilitada autoridad política y moral del gobierno estatal y a los gobiernos locales a cargo del PRI.

La mancuerna poder económico-poder político se conoce bien en Chiapas porque la ha padecido hasta el cansancio. Más que en ninguna otra parte del país, en Chiapas hay una conciencia generalizada de la tremenda resistencia del partido oficial al cambio, porque ahí más que en ningún otro lugar, el PRI ha sido y es un instrumento de control y dominio caciquil, incluyendo por supuesto, caciques indígenas.

Por ello también la movilización social por abajo está desbordada y despliega con imaginación las acciones de lo que es la “sociedad civil” emergente en un estado en que el 58 por ciento de la población total se dedica a la agricultura: el Consejo Estatal de Organizaciones Indí-

genas y Campesinas (CEOIC), la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC-Unión de Uniones), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), el Consejo Regional de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Soconusco (CROICS), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coordinadora Campesina Indígena de Chiapas (COSICH).

En la lucha por la defensa del más importante de sus derechos políticos, el derecho al voto, esa sociedad civil ha debido nuevamente echar a volar la imaginación para crear sus propias instituciones: por ejemplo, para recopilar y sistematizar los agravios cometidos en el último proceso electoral de agosto de 1994, ha creado la Procuraduría Electoral del Pueblo. Para procesar las acusaciones sobre irregularidades electorales, ha integrado el Tribunal Electoral del Pueblo Chiapaneco.

La crisis política chiapaneca tiene una nueva dimensión regional y nacional que no fue resuelta por las elecciones: una amplísima exigencia social de respeto al voto porque se quiere la paz, de eliminación del sistema político excluyente porque se quiere escuchar a los indígenas, de limpieza en los procesos de elección de gobernantes porque de eso dependerá la atención de las ingentes necesidades sociales insatisfechas.

Ernesto Zedillo tomó posesión como Presidente en noviembre de 1994 y respecto a la crisis política de Chiapas de inmediato puso en juego una estrategia de mediano plazo fundada en una política declarativa de diálogo con los dirigentes zapatistas, mientras simultáneamente daba luz verde a la movilización masiva del ejército federal tratando de cercarlos, política que se fracturó con la ruptura del cerco militar hecha por el EZLN el 19 de diciembre, evento que formalmente dio el timbre de alerta para la devaluación del peso frente al dólar. Después de un breve intervalo en el que el régimen se debatía en esfuerzos por superar el caos cambiario, las acciones militares quedaron en Chiapas virtualmente congeladas, pero en cuanto el régimen negoció con Estados Unidos un paquete de rescate financiero, sorpresivamente, se relanzó la ofensiva militar con más fuerza contra las comunidades zapatistas.

El relanzamiento de la estrategia militar empezó con una campaña publicitaria para convertir el problema de la "violencia zapatista" en el asunto central que supuestamente más preocupaba a los mexicanos. Zedillo abandonó la fórmula inicial "dialogadora" para apoyarse abiertamente en los altos mandos del ejército federal y relanzar la segunda ofensiva militar, esta vez disfrazada de acción judicial encabezada por

la Procuraduría General de la República, estrictamente “apegada a derecho” y “muy cuidadosa del respeto a los derechos humanos”.

Para remontar la crisis de credibilidad del régimen de Zedillo, abierta en el exterior por el pésimo manejo de la situación económica, los servicios de inteligencia del ejército federal y la coordinación de seguridad nacional, le montaron dos cómodos pretextos: uno, el descubrimiento de dos arsenales del EZLN fuera de Chiapas; otro, el “secuestro” en Chiapas de dos militares que habían sido enviados por sus superiores ni más ni menos que a tomar fotografías de los miembros del gobierno en rebeldía de Amado Avendaño, justo en las instalaciones que son sede del gobierno rebelde en las oficinas del Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de Las Casas. A partir de ahí, la estrategia guerrillera de Zedillo para presentarse como un Presidente fuerte, mostró varios objetivos interrelacionados: primero que nada, rodearse siempre de militares para mostrar una imagen pública de “fuerza”, pero enfatizando siempre que actuaba con la legalidad en la mano.

Segundo, ir a fondo en la decisión de “desenmascarar” a Marcos, publicitando mundialmente su “verdadera identidad” como un simple mestizo, peor aún, como nacido de una familia acomodada, como un intelectual mesiánico e ideologizado por haber estudiado con los jesuitas y haber aprendido marxismo.

El tercer objetivo, contenido en la fórmula utilizada para atacar a los zapatistas, fue tratar de dividir dentro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena a los miembros de la dirección que no son indios, ni de extracción social “popular” ni cien por ciento chiapanecos.

El cuarto, tratar de aislar a los zapatistas de su población de apoyo, al ocupar con tropas federales los municipios rebeldes y destruir con saña enfermiza las raquílicas propiedades que aquella dejó detrás al huir hacia la selva y la montaña.

El quinto objetivo, fue tratar de aislar a los indígenas zapatistas de las organizaciones urbanas, sociales, políticas y organismos no-gubernamentales nacionales y extranjeros que les habían brindado apoyo y solidaridad a lo largo de más de un año.

El sexto objetivo, ha sido satanizar a los sectores de la Iglesia más comprometidos con la opción de los pobres y que empeñaron esfuerzos y recursos humanos y materiales en la búsqueda de una solución política negociada en Chiapas.

Por todo eso también, las incursiones militares masivas en los poblados de la zona de influencia más abiertamente zapatista, vinieron acom-

pañadas en otros lugares del país con detenciones arbitrarias y declaraciones arrancadas bajo tortura, con cateos domiciliarios, con la violación a la autonomía universitaria en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco de la Ciudad de México y con una profusa campaña propagandística en contra de organizaciones sociales como el Congreso por la Paz (CONPAZ) y de sindicatos como el del autotransporte de la ciudad de México, Ruta-100.

Todo ello abrió la dimensión interna de la crisis de credibilidad, comenzando porque la fundamentación jurídica de las acciones del ejército federal en Chiapas fue cuestionada por amplios sectores políticos y sociales, sobre la base de que el propio texto constitucional establece que en épocas de paz, el ejército no puede cumplir funciones que le corresponden a organismos civiles como la Procuraduría General de la República.

Y antes de que el ejército federal invadiera de nuevo Chiapas, ni se decretó el estado de excepción ni se declaró formalmente la guerra ni se suspendieron las garantías individuales. De modo que un ingrediente importantísimo de la crisis política actual está en que por mandato presidencial el ejército Federal violó la constitución y rompió con el estado de derecho que decía defender, lo que en rigor está mostrando la intención de que el ejército pase a jugar un nuevo papel dentro del sistema de dominación en México y frente a la profundización de la crisis social en que nos tiene sumidos el neoliberalismo.

El "desenmascaramiento" de Marcos al revelar el gobierno su supuesta identidad no sólo no tuvo el efecto de desprestigio que se esperaba, sino que, paradójicamente, contribuyó al desenmascaramiento del propio Zedillo, que hablaba de diálogo mientras montaba ofensivas militares, que ofrecía conciliación, paciencia y tolerancia, cuando preparaba la agresión, perdía los estribos y daba rienda suelta a su belicosidad. Ahora bien, la presencia del ejército federal en la persecución de un grupo armado como es el EZLN, no nos debe llevar a perder de vista que el régimen de Ernesto Zedillo se negó a responder a las demandas de democracia electoral del pueblo chiapaneco, hasta militarizar el estado y convertirlo en zona de guerra. De tal forma que esa dimensión política del problema chiapaneco sigue abierta sin solución.

Por otra parte, los afanes persecutorios e intimidatorios contra las organizaciones sociales, los intelectuales, los dirigentes políticos y sindicales en otros rincones del país, reviviendo los métodos del tristemente célebre senador norteamericano McCarthy, pero ampliamente iden-

tificados en México con la nefasta figura presidencial de Gustavo Díaz Ordaz que masacró al movimiento estudiantil-popular en 1968, comenzaron a saltar hechos pedazos gracias a la movilización de masas, profundizando la crisis de credibilidad del régimen de Zedillo, pero esta vez en el ámbito exclusivamente nacional.

El viernes 10 de febrero, frente al Ángel de la Independencia, surgió una consigna que se extendió como reguero de pólvora por toda la ciudad de México y en otros lugares del país: "todos somos Marcos". Y el sábado 11 de febrero, casi cien mil personas, de todas las edades y de las más variadas condiciones sociales y hasta preferencias políticas, marcharon hasta el Zócalo rechazando la declaración de guerra de Zedillo, exigiendo el fin de las maniobras bélicas, ovacionando a Marcos y exigiendo respeto a las organizaciones sociales. Con sucesivas manifestaciones de masas que demandaban la paz y el retiro del ejército de los poblados zapatistas, los restantes objetivos políticos de la estrategia zedillista transitoriamente se anularon antes de desplegarse en toda su virulencia, obligando además a la reapertura formal de una salida pacífica y negociada a la crisis de Chiapas, que sin duda, se ha convertido en un parteaguas político nacional.

Veamos entonces cómo se desencadenó la dinámica de la crisis económica y las fórmulas que se utilizan para tratar de sortearla, para luego regresar a examinar los términos del debate político actual en México en relación con Chiapas y la evolución de la crisis política.

## I. LA DEBACLE CAMBIARIA, DETONANTE DE LA CRISIS

En la lógica del modelo económico neoliberal, explícitamente y desde los inicios del régimen de Carlos Salinas de Gortari se argumentó que las altas tasas de interés en México más la libertad total al movimiento de capitales y la política de privatizaciones y apertura comercial, atraerían masivamente inversiones extranjeras.

Y efectivamente, los capitales llegaron. Pero contradictoriamente para el equipo económico salinista que reclamó en 1988 la necesidad de instrumentar un drástico programa de ajuste para mejorar la "estabilidad de largo plazo", los capitales extranjeros llegaron como inversiones de portafolios y a colocarse en instrumentos financieros precisamente de corto plazo que son, por naturaleza, extremadamente volátiles.

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la inversión extranjera directa en ésta a septiembre de 1994 era de 56 mil millones de dólares. Pero en el mercado de dinero, la inversión extranjera en bonos del gobierno federal llegaba en la misma fecha a 25 mil 300 millones de dólares, lo que arrojaba un total de 81 mil 350 millones de dólares.

Eso, se nos repitió hasta el cansancio por Miguel Mancera, gobernador del Banco de México y por Pedro Aspe, entonces secretario de Hacienda, los ideólogos egresados de la universidad privada Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), era la medida del "éxito" del país y no tenía que preocuparnos. La eficiencia en el uso de esos recursos nunca preocupó a los conductores de la política económica, que percibían como enteramente "normal" la llegada de miles de millones de dólares que nunca se tradujeron en tasas de crecimiento de la economía superior a 4.5 por ciento anual.

Al amparo de esa entrada masiva de capitales extranjeros, no sólo se sobrevaluó el peso sino que se hizo posible un crecimiento espectacular de las reservas monetarias internacionales de México, que alcanzaron cerca de 30 mil millones de dólares a principios de 1994. Pero pronto llegó el límite de ese "éxito" cuando se vio, en diciembre del mismo año, que habían caído a sólo 6 mil millones de dólares, por tres razones: la utilización de las reservas para financiar un abultado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (de 29 mil millones de dólares en 1994), por la no llegada de nuevos capitales y, además, por la fuga de capitales. La devaluación se convirtió así en el detonante de una nueva crisis financiera en la economía mexicana.

## II. LA DINÁMICA DE LA INCERTIDUMBRE

Es importante aclarar que las inversiones extranjeras de portafolio dejaron de entrar a México a partir del segundo trimestre de 1994, esencialmente porque la persistencia del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos al coincidir con la sobrevaluación del peso frente al dólar, ya anunciaba el riesgo de una devaluación. Pero además —y esto debe ser suficientemente enfatizado— porque casi al mismo tiempo se había iniciado una firme tendencia alcista de las tasas de interés en Estados Unidos, que representó en el año aumentos de varios puntos porcentuales, volviendo menos atractivas las inversiones del capital especulativo en instrumentos financieros mexicanos.



Ante el aumento de la incertidumbre derivada del crecimiento del déficit de la cuenta corriente y con ella del riesgo por las evidencias de una moneda sobrevaluada, los grandes inversionistas exigieron ya no sólo tasas de interés más altas que en Estados Unidos, sino además, instrumentos que explicitaran la protección del riesgo cambiario, sobre todo a partir del asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en circunstancias todavía no aclaradas, el 22 de marzo de 1994. Así fue como aparecieron y cobraron notoriedad nacional e internacional los villanos de esta crisis financiera: los Tesobonos.

Si antes la mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros compraban Certificados de la Tesorería (CETES), que son instrumentos de la deuda interna del gobierno federal, para sacar ventaja del fuerte diferencial de las altas tasas de interés nacionales respecto a las prevalencias en Estados Unidos, a partir del segundo trimestre de 1994 y para cubrirse del riesgo de una devaluación, muchos inversionistas extranjeros y nacionales iniciaron movimientos de cambio de sus inversiones a instrumentos como los Tesobonos, nominados en pesos pero pagaderos a su vencimiento al tipo de cambio vigente del peso frente al dólar, es decir, se trataba básicamente de instrumentos financieros que estaban protegidos ante cualquier eventual devaluación, porque además estaban apoyados en dólares que los bancos privados habían contratado con bancos comerciales de Estados Unidos.

Por esa razón, en esta nueva crisis la banca central (el Banco de México), en diciembre de 1994, se enfrentó a la baja dramática de las reservas monetarias y la presión de los extranjeros que querían sacar sus inversiones de México, ante los bancos nacionales que se quedaron sin créditos en dólares para fondear los Tesobonos y ante la presión de tener que cubrir los Tesobonos que ya comenzaban a vencer en el mes de diciembre. Todo ello obligó al Banco de México a “retirarse del mercado cambiario”, asumir la devaluación y pedir la ayuda del Departamento del Tesoro norteamericano como “garante de última instancia” para enfrentar la crisis financiera.

### III. EL PAQUETE DE RESCATE Y SU CONDICIONALIDAD

El diagnóstico oficial todavía hoy reitera que México tiene un problema económico de “corto plazo”. Que tenemos una “gran solidez estruc-

tural” y que lo único que hace falta es seguir adelante por el camino de las reformas que introdujo en la economía básica, aunque no exclusivamente, el régimen de Carlos Salinas de Gortari.

Según ese diagnóstico, no hay pues nada nuevo que amerite cambios radicales en la estrategia económica, sino más bien, se requiere “decisión” para aplicar una dosis corregida y aumentada de las mismas medicinas neoliberales que se aplicaron a lo largo del sexenio salinista: más apertura comercial y financiera, más desregulación estatal y más privatización, nuevamente bajo la forma de un drástico programa gubernamental recesivo, de *shock* de demanda.

Se insiste en que vivimos un problema de corto plazo porque en el centro de la crisis financiera y monetaria actual de México, está el vencimiento de los Tesobonos por 29 mil millones de dólares a todo lo largo de 1995, lo que significa que el gobierno federal deberá tener disponible por lo menos 17 mil millones de dólares que es la suma de dinero que eventualmente debería reintegrar a la masa de inversionistas extranjeros, que dispersos en varios miles y difíciles de identificar en sus expectativas y en sus pautas de toma de decisiones, volvieron a esta crisis mucho más delicada que la crisis financiera de 1982. O también, implica que el gobierno federal deberá buscar la reconversión de esos instrumentos a otros de deuda a más largo plazo, tratando de evitar la salida de esos recursos fuera del país.

Por si ello fuera poco, “generosamente”, como es costumbre siempre que se trata de México, el gobierno demócrata de Estados Unidos, ahora encabezado por William Clinton, repitió los mismos esquemas abusivos de “rescate” que utilizó el republicano Ronald Reagan en la crisis de la deuda externa de 1982 y nos dijo, doce años después: se avalarán nuevos títulos de deuda mexicana hasta por 40 mil millones de dólares, pero si México da como garantía los ingresos de su petróleo de exportación durante 4 años. Es importante señalar que la falta de precisión en torno al monto total requerido para la operación de rescate de México, contrasta con la sistemática condición reiterada de que las ventas de petróleo serían la garantía del pago de esos recursos. En efecto, primero se habló de que México saldría adelante con sólo 18 mil millones de dólares, poco después se dijo que con 30 mil, a finales de enero de 1995 se juraba que la cifra real era de 40 mil y finalmente, el paquete de rescate fue por más de 50 mil millones de dólares, de los cuales, el gobierno de Estados Unidos participaba directamente con 20 mil millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional con

17 575 millones de dólares, el Banco de Pagos Internacionales con 10 mil millones de dólares y la banca comercial internacional con 3 000.

La “visión” de quienes establecieron la meta del paquete de rescate consistía en que, en realidad, estaban pensando en un ahorro frente al problema de tener que respaldar los casi 300 mil millones de dólares que saldrían volando de los mercados financieros “emergentes” si la crisis mexicana llegara a agravarse.

#### IV. EL CÍRCULO VICIOSO DE LA INESTABILIDAD MACROECONÓMICA: USO ABUSIVO DEL AHORRO EXTERNO, SOBREVALUACIÓN MONETARIA, OLEADA DE IMPORTACIONES, CRISIS FINANCIERA

Recapitulando sobre las fallas del modelo neoliberal, tenemos que el peso sobrevaluado por la entrada masiva de capitales especulativos, combinado con la excesiva apertura comercial, nos hicieron una economía fuertemente adicta a todo tipo de importaciones y esa “adicción”, hizo que el déficit de la cuenta corriente llegara a 27 mil millones de dólares apenas al tercer trimestre de 1994 (lo que en un momento dado se complicó con la fuga de capitales y evidenció finalmente lo insostenible de dicho déficit).

Además del efecto destructivo que provocó esa oleada de importaciones sobre el aparato productivo nacional, hay que considerar el grave costo que tenía el que los capitales extranjeros que entraban al país y permitían balancear el déficit de la cuenta corriente con el superávit en la cuenta de capitales, recibieran el “premio” de una tasa de interés superior a la de Estados Unidos, que contaran además con la cobertura del riesgo cambiario y gozaran, para su mayor disfrute, de operaciones bursátiles libres de impuestos, ya que en México las operaciones de la BMV no pagan impuestos. Esas son las tres razones que nos hicieron un jugoso y ejemplar mercado financiero “emergente”.

La devaluación del peso mexicano estaba pues en la agenda gubernamental desde hacía por lo menos un año. Pero en relación con la estabilidad del peso, debe decirse que no hay ninguna duda de que las autoridades de la Secretaría de Hacienda, apoyadas por las del Banco de México, tomaron la decisión política de ligarla a la permanencia misma del partido oficial en el poder: decidieron no llegar a las elecciones federales de agosto de 1994 con el peso devaluado, a riesgo de

repetir el colapso de legitimidad que vivió durante todo su sexenio Carlos Salinas de Gortari.

En resumen, este esquema neoliberal de abuso del ahorro externo y erosión del ahorro interno por el daño a la planta productiva que provocan las importaciones, es lo que ha hecho que la socialmente costosa y prolongada reforma macroeconómica vuelva a desembocar, una vez más, en crisis financiera, esfumando las promesas electorales que hizo el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, de que con él llegaría el bienestar microeconómico, el "bienestar familiar".

## V. LAS DIMENSIONES DEL AJUSTE MACROECONÓMICO

Una vez identificados los alcances de la crisis financiera a través de la magnitud de los fondos requeridos para el rescate, el control de la inflación volvió a quedar como la primera prioridad de la política económica gubernamental. Al pactar un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, para poder acceder a créditos primero por 7 550 y al final por un total de 17 550 millones de dólares destinados a recomponer las reservas monetarias en poder del Banco de México, el gobierno de Ernesto Zedillo se comprometió a que "si las políticas mencionadas no logran estabilizar rápidamente la situación, México fortalecerá adicionalmente esas políticas".

El "Acuerdo para Superar la Emergencia Económica", en una primera versión anunciada el 3 de enero de 1995,<sup>1</sup> fue pactado internamente por el gobierno después de intensas y difíciles negociaciones con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales. Entre sus objetivos explícitos destacaban dos, limitar al máximo el impacto de la devaluación y sanear la deuda interna gubernamental, representada por los 29 mil millones de dólares de Tesobonos que vencen en 1995.

La contención de los precios se intentaría básicamente mediante el control de los salarios (ofreciendo 7 por ciento de aumento al salario directo y 3 por ciento como "subsidio fiscal" para los salarios mínimos), mediante la reducción del gasto gubernamental (especialmente de la inversión pública que se recortaba en -10.7 por ciento) y la contracción severa del crédito interno del banco central (limitándolo a

<sup>1</sup> Véase *La Jornada*, México, enero 4 de 1995.

10 mil millones de nuevos pesos). En términos concretos y como lo veremos con más detalle adelante, eso significaba sumir a la economía mexicana en una drástica recesión, mediante el expediente de provocar un *shock* de demanda.

Dicho plan estaba montado sobre varios supuestos que conviene explicitar para que se entienda la persistencia de la incertidumbre: el primero, que se trataba de una crisis de liquidez, de un problema de corto plazo. Segundo, que el plan funcionaría si el tipo de cambio del peso frente al dólar se lograba estabilizar en el nivel de 4.5 nuevos pesos por dólar, para lo cual era crucial que la tasa de inflación anualizada no rebasara el nivel de 19 por ciento. Tercero, que las exportaciones crecerían en 15.9 por ciento y que el PIB crecería sólo en 1.5 por ciento. Cuarto, que la devaluación tendría un efecto limitado sobre los precios debido a que sólo impactaría en los precios de los productos con componentes o de marca extranjera. Quinto, supuesto que el déficit de la cuenta corriente para 1995 sería de 14 mil millones de dólares y se volvía manejable con el aumento de las exportaciones, con la llegada de inversión extranjera directa, con endeudamiento externo del gobierno federal y con otros recursos. Sexto, que con sólo 40 mil millones de dólares de rescate, se podrían sanear las deudas con vencimientos en 1995: 17 mil millones de dólares en Tesobonos en poder de inversionistas extranjeros y 18 mil millones de dólares de amortizaciones de pasivos de los bancos comerciales mexicanos. (Véase el Memorándum de Políticas Económicas, dirigido por el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México al director gerente del FMI, Michael Camdessus, el 26 de enero de 1995).

Pero al conocerse las cifras de la inflación acumulada tan sólo en enero y febrero de este año (7.18 por ciento) resultaba una tasa anualizada de 42 por ciento, cifra muy superior a la de 19 por ciento originalmente planeada. Con el conocimiento de esa cifra, todas las metas del programa tuvieron que replantearse.

Así, el 9 de marzo del presente año, se formalizó una segunda versión del plan de *shock*,<sup>2</sup> que como novedad, ya no era un ajuste "pactado" con los organismos empresariales y sindicales, sino que fue presentado como una decisión gubernamental unilateral. Como vimos que se había comprometido con el FMI, la decisión consistió en reforzar las

<sup>2</sup> Véase Guillermo Ortiz Martínez, "Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de la Unidad para Superar la Emergencia Económica", en *Perfil de la Jornada, La Jornada*, México, 10 de marzo de 1995.

políticas que ya se habían adoptado desde principios de enero, de tal forma que ahora el plan gubernamental no sólo mantenía los objetivos de limitar el impacto de la inflación y sanear las deudas de corto plazo con vencimientos en 1995, sino se planteaba un objetivo adicional: lograr un superávit comercial para poder pagar las amortizaciones e intereses de la deuda externa.

Por supuesto, la nueva versión obligó a replantear las metas para 1995, de tal forma que la tasa de inflación se fijó en 42 por ciento, se reconoció que el PIB caería en -2 por ciento y que los salarios tendrían un aumento adicional de 10 por ciento, lo que significativamente representa poco más de una tercera parte de la inflación total esperada. Se reconoció que habría un aumento significativo del nivel de desempleo, sobre la base de que ya había un millón de desempleados al inicio de 1995, a los que se sumaron 250 mil despedidos tan sólo en enero y febrero, pero a quienes se sumarían otros 500 mil despedidos más que perderían su trabajo en el curso de los siguientes 6 meses; si tomamos en cuenta el factor demográfico que lleva a un millón 200 mil jóvenes a entrar en edad de trabajar, el ajuste nos deja con un déficit de empleo para 1995 de más de tres millones.

Bajo el supuesto de que el peso se estabilizará alrededor de seis nuevos pesos por dólar, se amarró aún más la reducción del gasto corriente gubernamental (-9.8 por ciento) afectando sobre todo a las plazas de bajo nivel dentro del sector público, se recurrió a la elevación drástica de las tasas de interés internas para atraer dólares y para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Se aumentaron los precios de los bienes y servicios que proporciona el Estado (35 por ciento de aumento en la gasolina, 20 por ciento de aumento en gas y energía eléctrica) y se aumentó en 50 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (quedando en una tasa impositiva de 15 por ciento).

Además de la novedad de que esta fase del programa ya no estuvo pactada con líderes empresariales ni sindicales, se introdujeron otras dos novedades: las Unidades de Inversión, como mecanismo para "indexar" las tasas de interés y coadyuvar al saneamiento del problema bancario de "carteras vencidas" y el Mercado de Futuros de Divisas, para tratar de reducir las oscilaciones en la flotación del tipo de cambio.

La estrategia gubernamental respecto al saneamiento de las deudas, parece reposar alrededor de tres mecanismos: elevar drásticamente las tasas de interés para contener y eventualmente bajar la cotización del tipo de cambio, colocar instrumentos de deuda gubernamental in-

terna en pesos a plazos más cortos para atraer liquidez y lanzar instrumentos de deuda gubernamental externa a plazos largos para ir cancelando el problema de los Tesobonos.

El resultado sorpresivo de contar con un superávit comercial de 452 millones de dólares en febrero de este año, llevó a replantear la meta de 14 mil millones de déficit hasta reducirla a sólo 2 mil millones de dólares. Ello significa que el gobierno optó, en los hechos y dado el alto componente de importaciones que tiene la producción mexicana, por someter la economía a una caída mucho más profunda del PIB para poder obtener superávit comerciales mensualmente, que al final hagan manejable el nivel de déficit de la cuenta corriente, permitan la estabilización del tipo de cambio y hagan factible el servicio de la deuda externa.

En esas condiciones, es previsible que en el curso de los próximos meses vuelvan a revisarse las metas de crecimiento de la economía, pues la caída del PIB, dependiendo del nivel en que se establezca el tipo de cambio, probablemente estará entre cinco y siete por ciento o aún más, lo que nos habla de un escenario social extremadamente complejo: altísimas tasas de desempleo por el cierre de empresas y eventual ajuste o quiebra de bancos, drástica caída de los salarios y del consumo, deterioro de los servicios públicos, especialmente los relacionados con la salud y la seguridad social, pero sobre todo, nos anuncia fuertes conflictos sociales y políticos. La crisis económica, al entrar en sintonía con la crisis política, puede detonar grandes movilizaciones de masas en el campo y en las ciudades. El modelo neoliberal, fatalmente acabará por revisarse.

## VI. CHIAPAS COMO CENTRO DE LA CRISIS POLÍTICA EN LA INESTABILIDAD MACROECONÓMICA ACTUAL

En el transcurso de esta crisis económica y política, en el país se dio un profundo debate a propósito de la soberanía nacional, tema que entre sectores del bloque en el poder se suponía había caído en desuso por el apabullante avance de la globalización y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, aunque partidos políticos y organizaciones sociales populares la reclamaban como preocupación fundamental.

En el debate, por ahora estuvieron abiertamente implicadas sólo tres

dimensiones de la soberanía nacional: el asunto de la soberanía territorial, el problema de la soberanía monetaria y la capacidad nacional de autodeterminación de la política económica. Por ello, creemos que un recuento final ligando esas tres dimensiones, nos dará una idea precisa del discurso político zedillista y la capacidad de gestión real y de negociación que ha demostrado en los hechos el actual equipo económico gobernante. Ese recuento nos dirá, además, de dónde provienen realmente algunas de las tendencias a una salida autoritaria frente a la crisis política actual.

El gobierno de Ernesto Zedillo en relación con Chiapas apareció obsesionado con la dimensión de la "integridad territorial de la soberanía nacional", por eso insistió en proclamar que ya la ejerce a carta cabal desde que las tropas del ejército federal ocupan los cuatro municipios rebeldes de los indígenas zapatistas en la selva Lacandona.

El sustrato ideológico utilizado para legitimar el despliegue masivo de tropas federales por todos los rincones de Chiapas estuvo en que para el gobierno, la violencia del levantamiento armado de los zapatistas en enero de 1994, también explica el desastre económico de diciembre de 1994, enero y febrero de 1995.

Pero eso mismo permite advertir una intención propagandística cuando se reitera en los medios de comunicación de masas la idea de que eran los zapatistas los responsables del desorden económico y del caos en los mercados financieros, cosa que, curiosamente, los propios voceros de los mercados financieros abierta y explícitamente refutaron.

Ésa fue la explicación que dio el fugaz secretario de Hacienda Jaime Serra Puche, al anunciar la devaluación el 20 de diciembre del año pasado. Eso es lo que desde entonces repiten machaconamente los noticiarios de la cadena de televisión más influyente del país, Televisa. Esa es también la explicación que da el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera y es la explicación contenida en el documento oficial de la Junta de Gobierno del mismo banco.<sup>3</sup>

Pero lo más increíble del asunto, que amerita un largo paréntesis, es que un puñado de intelectuales encabezados por el poeta Octavio Paz que dirige la revista *Vuelta*, el 24 de febrero hicieron público un manifiesto en la prensa nacional,<sup>4</sup> argumentando lo siguiente: que es grave la violencia verbal de escritores y periodistas en los diarios.

<sup>3</sup> Véase *Criterios de Política Monetaria para 1995*, Banco de México, México, 1995.

<sup>4</sup> Véase *La Jornada*, México, 24 de febrero de 1994, p. 19.



Proponían a todos deponer las armas inflamables de la retórica, sin que nadie renuncie a la exposición pública de sus ideas. Pedían una discusión racional y civilizada. Proporcionaron la fundamentación más cuidadosa y sofisticada de las acciones militares del gobierno de Ernesto Zedillo, al destacar que desde hace catorce meses una parte del territorio nacional había sido ocupada por un grupo armado. Manifestaron no tener interés en discutir los orígenes ni los móviles del levantamiento, sino más bien, remarcar la urgencia de iniciar negociaciones que devuelvan la paz a Chiapas y la tranquilidad a todos los mexicanos. Por eso mismo consideraban que las acciones del gobierno era legítimas.

Según ellos, esas acciones poseían un doble fundamento: por un lado, recobrar la soberanía de la nación sobre una parte de nuestro territorio. Por otro, abrir las vías de la negociación. En su lógica, los dos objetivos eran inseparables. Se manifestaron también a favor de una amnistía amplia que incluyera a los dirigentes del EZLN. Y que el gobierno en ese proceso demostrara al mismo tiempo firmeza y generosidad.

Declararon también tener interés especial en reconocer que entre las demandas del EZLN hay algunas de carácter nacional, pero por eso mismo, pidieron que la discusión y la decisión sobre ellas fuera de competencia de todos los mexicanos y no de un grupo en particular. Terminaban su desplegado, llamando al EZLN a deponer su actitud beligerante. Como simples ciudadanos. Más allá de los partidos y las banderas. Reconociendo que nadie puede hablar en nombre de los otros y menos que nadie los escritores y artistas.

El acuerdo entre destacados intelectuales liberales y conservadores que firmaron ese comunicado, no alcanzó para mencionar en todo su desplegado que hoy en día, las amenazas más severas a la soberanía nacional no se manifestaban en relación con la soberanía territorial por la acción de los zapatistas, sino en relación con la pérdida de autonomía monetaria y de definición de la política económica. Cosa fácilmente detectable para quien hubiera mínimamente seguido los avatares del rescate multimillonario orquestado por el gobierno de William Clinton. Los partidarios de la discusión racional y civilizada no encontraron ninguna irracionalidad en el diálogo que Zedillo ha venido proponiendo a los zapatistas: ofreció primero diálogo privado secreto, encarceló después a quienes había pedido fueran sus "correos" al tiempo que ordenaba la cacería de los dirigentes zapatistas, empujó con el

ejército a poblaciones enteras a lo más profundo de la selva y ha militarizando hasta los últimos rincones de Chiapas, para acabar lanzando una "ley del diálogo" que convoca a negociar con el ejército federal todavía persiguiendo a los dirigentes zapatistas.

En abierto desafío a la opinión pública expresada en miles y miles de manifestantes que en la ciudad de México y en otros lugares del país y del extranjero, han repudiado las acciones militaristas de Zedillo, el juicio de este puñado de intelectuales ligados políticamente al gobierno de Ernesto Zedillo quiso ser contundente: la salida militar es legítima, porque así la consideraban ellos. Para defender el recurso de la amnistía, que por segunda vez ha propuesto el gobierno sin mayor valoración autocrítica de lo ocurrido en la primera ocasión en que se planteó, los intelectuales pedían que alcanzara a los dirigentes zapatistas, no se fuera a quedar sólo en beneficio de los militares que dirigieron las acciones. Apoyaban la firmeza del gobierno, al mismo tiempo que se erigían en promotores de su generosidad. Y en lo que podríamos calificar como pinza intelectual para completar los efectos del asedio militar, que ya redujo a una parte de las bases sociales del zapatismo a la calidad de tribus nómadas, esos intelectuales pidieron que las demandas de carácter nacional del EZLN se queden afuera de la agenda. Es decir, que sólo se discutan con los zapatistas algunos de los problemas sociales y económicos de cuatro municipios perdidos en la selva. La generosidad volvió a salir, sólo que en defensa, ello, sí, de los derechos de todos los mexicanos.

Finalmente, hay que decir que en un momento en que las imágenes relacionadas con Chiapas circulaban por el mundo mostrando que las armas del ejército federal obligaban al éxodo de miles de familias indígenas, estos intelectuales le pedían al EZLN que abandone su beligerancia. A los intelectuales que no piensan como ellos, les pidieron que no hablen a nombre de nadie. Los simples ciudadanos, que se colocaban al lado del gobierno pero se creen por encima de partidos y banderas, dieron triste espectáculo al defender lo indefendible: la negociación traicionera y la incoherencia política de un régimen que, en menos de tres meses, ha mostrado cómo entiende los millones de votos por la paz y sus propias promesas de bienestar para la familia, que le llevaron a la presidencia.

Otra aspecto asociado y que merece atención especial está en el hecho de que se ha podido advertir en el tratamiento del asunto de Chiapas una intención de cambiar la imagen de debilidad de Zedillo,

que como dijimos antes, fue agravada por la incompetencia en el manejo de la dimensión estrictamente económica de los problemas recientes, lo que sumió, al régimen en una crisis de credibilidad entre miembros de la comunidad financiera internacional.

Para enfrentar esa parte externa de la crisis de credibilidad, Zedillo tomó el problema político-electoral y social de Chiapas con criterios esencialmente militares, dando un giro completo a su estrategia inicial de llamar a la vía política, la conciliación y el diálogo. Pretendió así responder a una primera exigencia de los acreedores internacionales: mantener el control gubernamental, con medidas civiles o militares, de la zona petrolera de México, a fin de poder garantizar el pago de los empréstitos.

Junto con la llegada de las primeras porciones del crédito a cargo del Fondo Monetario Internacional, se empezaron a evidenciar las tres principales exigencias políticas norteamericanas más recientes hechas al régimen de Zedillo: una, acabar con el asunto de los “delincuentes zapatistas”, para mostrar que efectivamente el gobierno controla todo el territorio nacional y no hay graves amenazas a la “seguridad nacional”. Dos, amarrar el compromiso de utilizar los ingresos de ventas a futuro de Pemex para el repago de la deuda en caso de incumplimiento; y tres, dar muestras de alternancia electoral con el partido de centro-derecha PAN, para dar muestra de “liberalización” del sistema político, lo que empezó hace poco con las elecciones estatales en Jalisco donde vimos la transición electoral más tranquila y civilizada que hayamos tenido en el pasado reciente.

El problema de la rebelión armada de los indígenas en Chiapas es asunto de grave preocupación para los intereses petroleros norteamericanos, porque los rebeldes están no sólo cerca, sino encima de una parte de la zona petrolera mexicana. Pero además, porque la dirigencia zapatista ha mostrado contar con una enorme popularidad nacional e internacional.

En esas condiciones, podemos decir que hay un impulso a la transnacionalización del conflicto en Chiapas y que ese impulso ha sido producto de la injerencia norteamericana desde hace rato, como puede verse con los apoyos directos al ejército mexicano en actividades de inteligencia, especialmente en el terreno de la información y el uso de las telecomunicaciones.

También con la proliferación de las asesorías represivas de consejeros militares argentinos y chilenos expertos en “guerra sucia”. Y ade-

más, con la movilización coordinada con el ejército guatemalteco que, a pretexto de vigilar sus propias fronteras, en realidad cierra la retaguardia de los zapatistas, movilizándolo hasta ocho mil de sus efectivos a la zona de conflicto.

En síntesis, si explicamos por qué el énfasis en el problema de la soberanía territorial, es porque ahí se advierte con claridad que la volatilidad de los mercados financieros, la inestabilidad del peso, los riesgos de insolvencia, el monto supermillionario de los recursos utilizados para el rescate de la economía mexicana y la desastrosa política monetaria del gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, fueron los factores que acabaron por “ablandar” a Zedillo respecto a las exigencias arbitrarias del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario Internacional reclamando un control externo tan estricto sobre las variables económicas y nuestros recursos energéticos, que la soberanía monetaria y la capacidad nacional de formular los lineamientos de la política económica mexicana han quedado hoy gravemente vulnerados. Veamos entonces estas dos dimensiones juntas.

A partir de ahora Estados Unidos tendrá el control efectivo del flujo de los ingresos por exportaciones petroleras de Pemex. Pero además, para recibir el flujo de recursos externos que alivie las tensiones de los mercados financieros, Estados Unidos nos impuso una política monetaria todavía más restrictiva que la que había, lo que implica altas tasas de interés y reforzamiento de la disciplina fiscal, vale decir, de los recortes sobre el gasto corriente y la inversión pública combinados con un aumento de los precios de bienes y servicios que produce el Estado. Con todo eso, el estancamiento inflacionario será simplemente devastador y además, prolongado. Asimismo, el esquema restrictivo fiscal se complementa con la profundización de las privatizaciones, especialmente en las áreas de transporte, telecomunicaciones y petroquímica, de las cuales se espera obtener entre 12 y 14 mil millones de dólares en los próximos tres años. En el sector bancario, se acelera el compromiso pactado en el TLC de apertura financiera.

La condicionalidad brutal que le impuso Estados Unidos al régimen de Zedillo revela el diagnóstico implícito entre los sectores más conservadores de allá y algunos de los más recalcitrantes de la comunidad financiera nacional: el sector financiero mexicano ya no da confianza y tampoco la tiene la gestión del Banco de México, pues según ellos Mancera debió devaluar antes de diciembre y no lo hizo por compromisos políticos a favor del candidato del PRI, Ernesto Zedillo.

Bajo esas condiciones, para ellos “asegurar la autonomía del banco central” pasaba por: ceder soberanía monetaria ligando más al peso con el dólar al imponer que la oferta monetaria esté plenamente respaldada con un monto de reservas equivalente. Pasaba por el expediente de imponerle al Banco de México la destructiva política de tasas altas de interés y a través de ello, auspiciar la llegada de capitales extranjeros de mediano y largo plazos. Pasaba por el otro costo implícito evidente de esa política financiera de altas tasas de interés internas: el aumento desmedido del peso del servicio de la deuda interna dentro del gasto del gobierno federal.

En la medida en que la crisis financiera vulneró severamente al sector bancario, el gobierno federal ha tenido que incluir explícitamente un plan para enfrentar la liquidez y la solvencia misma de los bancos mexicanos, varios de ellos en situación delicada por la acumulación de carteras vencidas en montos superiores a su capital contable, enfrentando todos una caída de la captación y con enormes dificultades para colocar sus capitales en actividades rentables. Una vez más, pero ahora con la banca en manos privadas, el gobierno federal se dispone a asumir los costos fiscales de los casos de insolvencia, esto es, socializando las pérdidas de los bancos cuando antes se les habían dado todas las facilidades para la privatización de las ganancias. Por todo esto, podemos decir que el éxito de las privatizaciones en México, tiene en la banca uno de los cuestionamiento más severos a la eficacia de las políticas neoliberales.

Por lo demás, lo importante de las recientes negociaciones de México con Estados Unidos es que para el gobierno de Estados Unidos, la piedra de toque de toda la negociación fue asegurar un mecanismo de resguardo del pago de los recursos que iba a otorgar al gobierno mexicano. Según puede verse en los documentos oficiales,<sup>5</sup> en dicho acuerdo el gobierno de Estados Unidos consiguió el control efectivo del flujo de ingresos por exportaciones petroleras de Pemex, al acordar que “Dichos fondos serán transferidos vía *Fewire* al Federal Reserve Bank of New York por Swiss Bank Corporation, sucursal de Nueva York, para ser acreditados a la Cuenta de Fondos Especiales”.<sup>6</sup>

Como han dicho los expertos financieros norteamericanos, se trata

<sup>5</sup> *Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana*, cuyo Anexo A es el *Acuerdo sobre el Esquema de Ingresos Petroleros*, enviado al Congreso de la Unión el 25 de febrero de 1995, México.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 3.

de un embargo precautorio ya que técnicamente los ingresos son propiedad del gobierno de México y puede transferir esos recursos a las propias cuentas bancarias, siempre que no haya incumplimiento de los pagos. Para los negociadores gubernamentales mexicanos, este asunto es poco relevante en relación con la soberanía nacional respecto de los recursos naturales por dos razones: una, porque según ellos ya otras veces se pusieron las ventas del petróleo como garantía crediticia; y dos, porque México nunca ha incumplido con sus pagos.

El Banco de México, sin explicitar que a partir de marzo de 1995 está ensayando un segundo programa de *shock* antinflacionario, corregido y aumentado, anunció que subía dramáticamente las tasas de interés para tratar de bajar el tipo de cambio del peso frente al dólar que en este mes está en el nivel de siete nuevos pesos por dólar. La tasa de interés de los Cetes a 28 días está actualmente (marzo 20 de 1995) en 82.38 por ciento y es la tasa que rige los rendimientos de los bonos gubernamentales en el mercado secundario. Y la Tasa de Interés Interbancaria Promedio, que es la que usan los bancos para fijar su propia tasa de interés, también a 28 días, está en 109.71 por ciento. Con las tasas en ese nivel se espera que lleguen capitales extranjeros y si esto ocurre, eventualmente podrían volver a bajar las tasas de interés.

Vista la negociación económica externa en su conjunto y los nuevos lineamientos que afloran en la política económica, tenemos que Estados Unidos ahora puede empujar cómodamente la salida militar del conflicto político-social en Chiapas, porque ya se aseguró el control del flujo de ingresos petroleros de México. Con la misma lógica de los tenedores de Tesobonos que eran instrumentos de corto plazo, exigió tasas de interés altas como premio inmediato para los capitales que dejará eventualmente dentro del país y como castigo drástico para los deudores nacionales que tienen pactadas deudas en pesos.

El reforzamiento de la disciplina fiscal significa que a Zedillo lo obligaron a que, aunque aumente el descontento social, no podrá relajar la restricción monetaria para no avivar la inflación, pues eso puede erosionar las ganancias de los capitales extranjeros. En suma, aquí también los candados eliminan el factor político de riesgo para Estados Unidos.

El único problema es que estos tres meses de crisis económica y política, nos dejan como saldo: un gobierno que ha perdido brutalmente la credibilidad interna y que tampoco gozará cabalmente de la credibilidad de los inversionistas internacionales; un régimen que exhibiendo

fuerza militar, se ha quedado sin autoridad política ni moral y cada vez más forzado a apoyarse en los militares; un ejército que se ve gravemente expuesto al descrédito social, cumpliendo en su propia tierra las exigencias abusivas de la “comunidad financiera internacional”; un gabinete económico sin fuerza real para validar la concordia interna ni defender la soberanía nacional; una recesión profunda con inflación, que se deberá enfrentar sin el recurso histórico de la activa intervención económica estatal. Pero lo más grave, es que la política económica tiende a precipitarnos en el peor escenario de insolvencia. Ésa es la dimensión de la crisis política que tenderá a juntarse con los reclamos sociales.